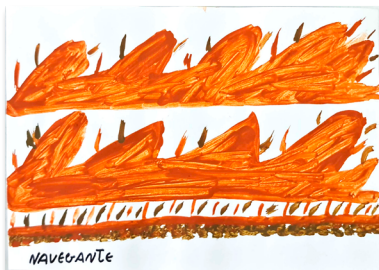


La lucha agroecológica en contexto de crisis civilizatoria

PABLO SARAVIA RAMOS

RESUMEN: El hambre y la obesidad siguen siendo hoy los grandes problemas mundiales asociados a la alimentación, los cuales se agudizan con tendencias hacia la privatización de las riquezas comunes que permiten la reproducción de la vida (agua, las semillas y la tierra). La agroecología, es un camino nutrido por los movimientos mundiales y las experiencias locales, que reclama un horizonte donde los territorios recuperen el control sobre sus sistemas alimentarios.

PALAVRAS CLAVES: Soberanía alimentaria. Agroecología. Agricultura familiar campesina. Extractivismos.



The agroecological struggle in the context of the civilizational crisis

ABSTRACT: Hunger and obesity remain today the major global problems associated with food, exacerbated by trends toward the privatization of the commons that enable the reproduction of life (water, seeds, and land). Agroecology is a path nurtured by global movements and local experiences, which calls for a horizon in which territories regain control over their food systems.

KEYWORDS: Food sovereignty. Agroecology. Peasant family farming. Extractivismos.

PABLO SARAVIA RAMOS

Doutor em Sociologia. Professor da Universidad de Playa Ancha (UPLA). Representante institucional no Comitê Acadêmico Processos Cooperativos y Asociativos (PROCOAS-AUGM) e membro do Grupo de Trabalho do CLACSO sobre Processos e Metodologias Participativas.
E-mail: pablo.saravia@upla.cl

RECEBIDO: 24/09/2025

APROVADO: 10/12/2025

1 Introducción

Desde múltiples voces se ha levantado el diagnóstico que el capitalismo, en su fase actual depredadora, nos lleva a un futuro incierto donde los desequilibrios sociales y ambientales pueden terminar por colapsar. Junto con la documentada crisis ambiental que se expresa en crecientes niveles de contaminación de todo tipo, calentamiento de la temperatura global, pérdida de agrobiodiversidad, entre otras dimensiones, en los últimos años asistimos a un contexto que no favorece problematizar y buscar soluciones conjuntas a nivel global. Esta tiene que ver con el ascenso a posiciones de poder en diferentes países de liderazgos autoritarios y de extrema derecha que niegan sistemáticamente la crisis en la cual estamos y que miran con descredito cualquier intento, acuerdo o tratado por visibilizar las causas y consecuencias de este momento civilizatorio. Solo para ilustrar recordemos que, durante el actual gobierno de Donald Trump, EE.UU. ha retirado su participación de la OMS, UNESCO, los Acuerdos Climáticos de París, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre otros. Por otra parte, la reproducción de los conflictos y amenazas bélicas que ha puesto en tela de juicio la condición humana de ciertas poblaciones, siendo el genocidio al pueblo palestino, liderado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su expresión más icónica, frente al cual países y organismos multilaterales han mantenido una pasividad que finalmente los hace cómplices.

Este escenario de odio, negacionismos y guerras raciales obliga a pensar más allá de las configuraciones propias de un modelo civilizatorio fundado en la muerte y no en las condiciones que permiten la reproducción de la vida. Por tanto, supone modificar las prioridades de todos los actores sociales y económicos intervinientes hacia unas que promuevan garantías y derechos sociales, en reemplazo de los principios extractivos, desiguales, coloniales y de maximización de las ganancias propias del capitalismo en la fase actual. En este contexto, la cuestión alimentaria no está exenta de estas tendencias lo que se expresa en fenómenos de larga data y que siguen impactando nuestras vidas, como veremos más adelante. Por esta razón, se hace cada vez más urgente y necesario promover, problematizar y co-construir caminos alimentarios críticos que permitan imaginar un presente y futuro más alentador.

Los siguientes apartados recuperan en términos temáticos este debate global, analizado dos grandes problemas humanitarios sin solución hasta el día de hoy (hambre y obesidad) y como han sido enfrentados por las agencias multilaterales. Posteriormente analizaremos algunas dimensiones claves para entender la agroecología en el contexto del modelo neoliberal chileno. Cerrando el texto con algunas reflexiones finales que esperamos alimenten el debate y contribuyan al conocimiento en estas materias.

2 Contexto global de la agroindustria y las políticas transnacionales:

2.1 Hambre y obesidad: dos grandes problemas alimentarios globales

El hambre y la obesidad en el mundo siguen siendo dos problemas globales que no parecen tener solución con las medidas tomadas hasta el momento. La dimensión cuantitativa de ambos es preocupante. Según la FAO, 2.300 millones de personas en el mundo se vieron afectadas por lo que dicha agencia llama “inseguridad alimentaria moderada o grave” en 2024 (FAO, 2025), mientras que para ese mismo año la llamada “inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición” aumentó por sexto año consecutivo llegando a ser 295 millones, casi 14 millones de personas más que en el año anterior (ONU, 2025). En términos globales, para el año 2024 se calcula que entre 638 y 720 millones parecieron hambre (FAO, 2025). En términos de la distribución de estos datos por continentes, los mayores porcentajes los encontramos en países del África y Asia (Nigeria, Sudán, República Democrática del Congo y Bangladesh) y en territorios en situación de guerra, como es actualmente el caso de Palestina. Es decir, el problema del hambre sigue siendo un problema de escala global, que sigue afectando principalmente a los “condenados de la tierra” (Fanon, 2017).

En cuanto a la obesidad el dato para el año 2022 indica que 2.500 millones de adultos de 18 años o más tenía sobrepeso, de los cuales más de 890 millones eran obesos; esto supone un incremento de casi el doble respecto de 1990, en dicha población

etaria, mientras que entre los adolescentes este indicador se ha cuatuplicado (OMS, 2025). Si bien es cierto, este fenómeno no es exclusivo de los países de ingreso bajo y medio, éste ha ido aumentando de manera vertiginosa en los últimos tiempos. Es decir, actualmente los países del llamado “sur global” enfrentan graves problemas alimentarios que impactan en el acceso de alimentos, la calidad de vida de las personas, y la prevalencia de determinadas afectaciones a la salud física y mental. Cabe recordar que para el 2019, las principales enfermedades no transmisibles causantes de muerte en el mundo, fueron las enfermedades cardiovasculares (17,9 millones), el cáncer (9,3 millones), las respiratorias crónicas (4,1 millones) y la diabetes (2 millones) (OMS, 2023). Es decir, en por lo menos tres de ellas, podríamos observar una relación entre su existencia y el factor de riesgo que supone el sobre peso y la obesidad.

La magnitud de estas cifras deberían ser razón suficiente para atender la cuestión alimentaria desde otros focos y con otros énfasis como, por ejemplo, la necesaria transformación de los fundamentos económicos y políticos del agronegocio. Lamentablemente asistimos a políticas globales que insisten en medidas que no atienden la cuestión de fondo, que tiene que ver directamente con cómo está estructurado el sistema agroalimentario mundial y la pérdida progresiva de soberanía, de parte de los territorios, sobre los sistemas alimentarios, en manos de grandes corporaciones que tienen el control hegemónico sobre la industria y la distribución alimentaria, todas las cuales están ubicadas en el llamado “norte global”. Si observamos la lista de las personas más ricas del mundo confeccionada por Forbes para el año 2025, el patrimonio neto combinado de la familia que controla una de las corporaciones (supermercado) más grandes del mundo dedicada a la distribución de alimentos la ubica en el primer lugar de esta “selecta” lista. Es decir, el negocio de los alimentos sigue siendo muy rentable para unas pocas personas en el mundo, mientras millones sufren hambre o están en situación de obesidad. Esto parece algo más que una paradoja o que una “casualidad” del modelo capitalista global.

Esta fuerte concentración y presencia de capitales extranjeros de la actividad económica vinculada con la comercialización de alimentos, se manifiesta en las economías tanto del norte como del sur. Por ejemplo, en el caso de Alemania cuatro grandes empresas controlan el 85% de la comercialización y venta de alimentos. En tanto, en Brasil las tres principales cadenas que controlan la distribución son de capitales extranjeros: Carrefour (Francia); GPA (controlada por el Grupo Casino (Francia) y la red Walmart (estadounidense) y DIA (España) (Chemnitz et al, 2017, citado en Schwab do Nascimento (2019). Estos actores operan como intermediarios en la cadena de la comercialización, donde compran, almacenan y venden alimentos provenientes de sistemas productivos con los cuales no tienen ningún tipo de relación económica, más allá que la compra de productos. En este modelo la cadena producción-comercialización-consumo está fragmentada y cada componente funciona de manera aislada entre sí.

Por lo tanto, no existen formas de conexión e interrelación entre las definiciones productivas de los sistemas agrarios, las necesidades o demandas de los consumidores (las cuales tienen un fuerte correlato cultural) y las dinámicas de los agentes que comercializan. Esta fragmentación ha favorecido, entre otras dinámicas, que ciertos productos funcionen como commodities (como es el caso del trigo) favoreciendo ciertos cambios en los hábitos alimenticios de países diversos hacia una dieta homogénea y con la consecuente pérdida de agrobiodiversidad y soberanía de sus sistemas productivos. Un claro ejemplo de lo anterior es el caso de la estructura de importaciones de maíz en México (un alimento que tienen un fuerte arraigo cultural y en las memorias y patrimonio culinario del pueblo mexicano) que incrementó sus importaciones de 5 millones de toneladas hacia finales de la década de los noventa (García; Santiago, 2004), a 22 millones de toneladas en 2024 (SIAP, 2024). Esta tendencia está directamente relacionada con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ha provocado una erosión profunda en la soberanía alimentaria acrecentado de manera significativa los niveles de dependencia a la importación de este grano en el país de Norteamérica (Moreno et al, 2016).

2.2 Acaparamiento de tierras: una tendencia global preocupante

El acaparamiento de tierras¹ es una de las tendencias globales que está afectando sensiblemente los equilibrios y los sistemas agrícolas alimentarios locales de los países del Sur. Se trata de la compra y/o arrendamiento por parte de empresas transnacionales (públicas o privadas) y fondos de inversión, de grandes extensiones de tierras dedicadas a actividades agrícolas amplias que van desde la producción alimentaria, hasta la de biocombustibles, pasando por la minería, la ganadería y la actividad forestal.

Este mecanismo que aparentemente es solamente comercial y que persigue, según organismos internacionales como el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, favorecer el crecimiento y la riqueza de la población local por medio de la modernización e incremento de la productividad de tierras en desuso o escasamente utilizadas, tiene una variada gama de otros impactos que se pretenden invisibilizar. En esta dirección la definición del acaparamiento de tierras que propone la International Land Coalition (ILC) es bastante más integral y advierte sobre los peligrosos límites que se pueden alterar con este tipo de instrumentos, ésta indica: “Adquisiciones o transacciones comerciales sobre grandes extensiones de tierra y sus recursos asociados, sin consentimiento libre, previo e informado de los dueños o usuarios de la tierra, por medio corruptos, sin participación democrática ni evaluación de impacto social, económico y ambiental, con violación a derechos humanos” (citando en Del valle, 2022, p. 141).

Como se observa no se trata de la implementación de una nueva estrategia, sino más bien la actualización del despojo como práctica política, económica y cultural instaurada a partir de los diversos procesos de colonización del sur planetario. En el caso chileno esto está presente en el origen de las usurpaciones coloniales de tierra y recursos del Walmapu (Correa, 2021), las que hoy en día siguen siendo parte de las reivindicaciones de esa primera nación y que se implementaron, al igual que las experiencias

1 Como con otros conceptos, organismos multilaterales como el Banco Mundial están intentando despolitizar, neutralizar e higienizar el debate nombrando a esta estrategia como “adquisiciones de tierra a gran escala” (Del Valle Calzada, 2022).

contemporáneas, a base de graves vulneraciones a los derechos humanos, tales como castigos corporales y coacciones, asesinatos y desplazamientos forzados de poblaciones y comunidades (Correa, 2021; Robles, 2023; Del Valle, 2022).

2.3 Agenda 2030: Otros objetivos para las mismas metas

Uno de los principales instrumentos que las agencias globales han impulsado, pero lamentablemente sin mucho éxito, es la llamada “Agenda 2030” que es la continuidad de la “Declaración del Milenio” que estableció 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio que se basan en las declaraciones y acuerdos adoptados en la ONU en la década de los noventa. Todos intentos fallidos de solucionar un problema que está en directa relación con las formas de expansión del capitalismo y los esfuerzos coloniales de globalizar y especular con la alimentación. Temas que no forman parte de las agendas multilaterales lo que explican en gran medida sus continuos fracasos. Esto desnuda una doble dinámica que está a la base de estas políticas globales que tienen que ver con el intento por despolitizar la cuestión del desarrollo y, particularmente lo alimentario y, por otra, mantener fuera del alcance de los potenciales cambios propuestos a las grandes corporaciones y grupos de interés que están involucradas directa e indirectamente con la producción, comercialización y consumo de alimentos. Además, estas políticas se construyen sobre eufemismos que buscan ocultar la profundidad del problema y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, como son las llamadas “crisis alimentarias” (Duch, 2014), que traducen el problema alimentario en clave episódica y coyuntural dejando de ver las condiciones civilizatorias que los sostienen junto con la permanencia de factores y consecuencias que provocan su reproducción.

En otro trabajo (Saravia; Pinheiro, 2025) hemos realizado un análisis pormenorizado del estado del cumplimiento del objetivo 2 que dice relación con el hambre. En este trabajo puntualizamos que ninguna de las metas relacionadas con este ODS en particular, permite pensar que esta Agenda promueva un cambio estructural o revolucionario en el sistema agroalimentario vigente, muy por el contrario, el contenido de algunas metas insiste en replicar viejos

mensajes sobre estrategias que no han contribuido a la solución del problema, sino que más bien son parte constitutiva del mismo (Saravia; Pinheiro, 2025). Por el contrario, las metas de la Agenda sugieren un foco en el “buen funcionamiento de los mercados” como la estrategia para enfrentar los problemas alimentarios globales, sin dejar en claro que significa exactamente esto, ya que, si de los mercados dependiera una parte de la solución del problema, esto significa que los movimientos de capital y la fijación de precios en los alimentos debería seguir otros principios éticos que los que guían hasta ahora la economía global. Esto no parece estar al alcance de los organismos multilaterales ni de la gran mayoría de los gobiernos que firman este tipo de acuerdos.

Resulta paradójico y desesperanzador que las mismas organizaciones multilaterales que estudian y miden los problemas globales asociados a la alimentación hace años vienen advirtiendo la persistencia deshumanizante de estos fenómenos y sean ellas mismas las que diseñen y les propongan a los gobiernos del mundo una hoja de ruta que insiste en medidas que naturalmente tenderán a su incumplimiento. Parece inevitable concluir que hemos dejado en las manos de la avaricia del neoliberalismo y sus grandes corporaciones la responsabilidad de organizar, comerciar y producir alimentos entendidos como mercancías y no como representantes de una memoria viva de los territorios. Afortunadamente y en paralelo a esta tendencia global, asistimos a la reproducción y mantención de economías locales agrarias que siguen produciendo alimentos desde una perspectiva diferente y que luchan constantemente por la recuperación del control con dignidad de sus sistemas alimentarios.

3 La agroecología en un contexto de país neoliberal: el caso chileno

La dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990) no solo fue un periodo marcado por la violación sistemática de los derechos humanos de miles de chilenos y chilenas, sino que también fue el telón de fondo para la instalación, sin contrapeso político, del neoliberalismo y sus lógicas de privatización y mercantilización

de la vida (Saravia, 2021). Con la llegada de la democracia, este modelo fue legitimado por una clase política que se ha dedicado, hasta el día de hoy, a gestionar, profundizar (en algunos casos) y perfeccionar dicho modelo, con intentos por dotarlo de un “rostro humano”, pero que no han significado una transformación en sus pilares fundamentales.

Para el tema que nos compete, este modelo se ha sostenido sobre algunas dimensiones que permiten comprender el contexto actual donde se desarrollan las experiencias agroecológicas. El primero de ellos, fue la privatización del agua (Chile es el único país del mundo que ostenta este triste récord) que tomó forma con la creación del Código de Aguas de 1981 que consagró el agua como un bien de uso público, pero la declara como un bien económico que se puede transar libremente en el mercado. A partir de este marco normativo, las facultades de aprovechamiento de agua fueron entregadas de manera gratuita y a perpetuidad a privados, los cuales pueden concurrir al mercado a vender, comprar y/o arrendar derechos de agua (Mundaca, 2014). Además, dicha normativa establece una separación entre la tenencia de derechos de agua y de tierras, es decir, en el Chile neoliberal se puede ser propietario del agua sin tener tierra, y ser propietario de tierras sin tener acceso al agua. Esta insensatez del modelo no ha podido ser corregida por años de gobiernos democráticos, los que a pesar de su perfil progresista (en la mayoría de los casos) se han mostrado débiles y complacientes con los poderes económicos y políticos que se han visto beneficiados de esta norma y que son actualmente los principales controladores del agua en Chile: Sociedad Nacional de Agricultura; Sociedad Nacional de Minería; Consejo Minero y la Asociación de Generadoras Eléctricas (Faúndez et al, 2017), a los que se suman un complejo entramado de sociedades agrícolas y de exploración e inversión mineras (Arellano, 2013).

En otra de las dimensiones relevantes para la producción agroalimentaria, como es el caso de la tierra, Chile tiene una larga historia de luchas y reivindicaciones políticas que en su primer impulso tuvieron un apoyo bastante transversal entre la clase política. Esto explica que, en el año 1962, durante el gobierno del conservador Jorge Alessandri (1958-1964), se promulga la primera ley de

reforma agraria en Chile. Gracias a ella se redistribuyen tierras estatales entre campesinos. Cinco años después, y bajo el slogan “La tierra para el que la trabaja”, el gobierno del demócratacristiano Frei Montalva (1964-1970) promulga una ley de sindicalización campesina junto con una nueva reforma agraria. Con esta última se limita la acumulación de tierra, fijando un máximo de 80 hectáreas de riego para todo propietario. Resultado de ambas leyes, se expropiaron aproximadamente 1.400 predios agrícolas equivalentes a 3.5 millones de hectáreas, además de organizarse más de 400 sindicatos. El posterior gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973) profundiza la política de reforma agraria logrando que en menos de una década (1967-1972) se “expropiaran todos los predios de más de 80 Ha. de riego básico, liquidándose de ese modo el latifundio en Chile” (Bengoa, 2016, p. 10). Esto se hizo con un amplio y transversal apoyo político que se materializó primero en una Reforma Constitucional y luego en una Ley de Reforma Agraria. Con ello se cerró un ciclo de transformación del campo chileno promovido por el Estado y que tuvo como foco la generación de mejores oportunidades de desarrollo para el campesinado nacional. No hemos vuelto a asistir en Chile a una política pública de semejante calado y con este foco.

Con el advenimiento de la dictadura cívico-militar luego del Golpe de Estado de 1973, todos los anteriores esfuerzos públicos son revocados, traspasándose la tierra a nuevos capitalistas con la intención de modernizar la producción agrícola (Gómez, 2023). Se da inicio a la llamada Contrarreforma Agraria que significó la suspensión de las leyes de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, persecución y criminalización de los dirigentes campesinos (Bengoa, 2016), la restitución de dos tercios del total de predios previamente expropiados (Gómez, 2023), la intensificación de los procesos de reforestación (Chonchol, 2018), se deroga la Ley 17.729 que protegía las tierras indígenas, se reemplaza por el DL 2.568 que promovía su división y venta (Portilla, 2000) y crea un mercado de las tierras con la incorporación de inversionistas (venidos de otros rubros) en el sector frutícola y del vino (Pozo, 2002). Es decir, se generaron las condiciones normativas y políticas para la instalación de un modelo de empresa agrícola centrado

en la rentabilidad y una degradación del empleo con el incremento del trabajo por temporada y la disminución de la contratación permanente (Portilla, 2000). Con ello se agudiza la pérdida de soberanía alimentaria de los territorios y se consolida una política pública agraria centrada en la exportación a mercados lejanos, el monocultivo y el subsidio, favoreciendo con ello la alta concentración en pocas y grandes empresas que pasan a controlar el sector.

Con la llegada de los gobiernos democráticos, este modelo agroexportador no sufre grandes cambios, por el contrario, se intensifican las políticas de apertura hacia los mercados externos con la firma de diferentes tipos de acuerdos comerciales (34 vigentes a día de hoy) que representan el 63% de la población mundial y el 87,1% del PIB global (SUBREI, 2025). Además, se restituye parte de la institucionalidad perdida durante la dictadura, se refuerza la perspectiva del fomento productivo, se promueve la asociatividad y se generaron instrumentos y políticas de apoyo a la pequeña agricultura, que en su fase más reciente incorpora iniciativas de comercialización a pequeña escala y compras públicas. A pesar de lo anterior, la centralidad de la política pública sigue enfocada en la producción a gran escala y destinada a la exportación.

Esta ampliación despolitizada de los instrumentos de promoción para la pequeña agricultura permite que el Estado chileno, promueva una política que fomente lo saludable y, al mismo tiempo, plantear como horizonte el convertir al país en una potencia agroalimentaria mundial, esto es, producir alimentos en las claves del agronegocio. Lo primero se observa en una de las iniciativas con gran impacto mediático que se inició en 2011 bajo el título "Elige vivir Sano". Para esa fecha el Programa referido declaraba que el 66,4% de la población en Chile tenía exceso de peso (Elige Vivir Sano, 2011) que resulta de la sumatoria de las tres categorías que se suelen utilizar en estas mediciones, es decir: sobrepeso (39%); obesidad (25,1%); obesidad mórbida (2,3%). Casi diez años después estos indicadores no se redujeron, sino que por el contrario aumentaron diez puntos porcentuales, siendo ahora un 74,2% de chilenos y chilenas que sufren algún grado de malnutrición por exceso. Este incremento también se observó en cada una de las dimensiones antes referidas: sobrepeso (39,8%), obesidad (31,2%)

y obesidad mórbida (3,2%) (Minsal, 2018). Cabe destacar también que en 2012 se aprueba la Ley 20.606 del Ministerio de Salud sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad que en su espíritu buscaba dar solución a las problemáticas de salud pública asociadas al sobrepeso y a la obesidad. Es decir, y siguiendo la tendencia de las políticas globales en la materia como hemos visto, este tipo de iniciativas no termina de atender las problemáticas de fondo y solamente se quedan en campañas de publicidad con alto impacto mediático pero que no modifican las condiciones de fondo que explican este tipo de afectaciones alimentarias.

Por otro lado, tanto los gobiernos de Michel Bachelet como los de Sebastián Piñera; adoptaron una política que fortalecía el mensaje agroexportador chileno, bajo el horizonte de convertir al país en una “Potencia agroalimentaria mundial”², es decir, una política nacional que profundiza el modelo extractivo agroexportador que ha perdurado en las últimas décadas. Este modelo se sustenta en una clara orientación hacia los mercados externos que lo llevan a ser el tercer país exportador de frutas a nivel mundial, el segundo productor mundial de salmón y uno de los más importantes productores de pesca de captura marina. Estos, junto con otros indicadores similares, hacen que la actividad agropecuaria de exportación sea un sector relevante en la economía nacional: la totalidad de actividades del rubro ubican a Chile como uno de los quince principales países exportadores de alimentos del mundo (Leporati; Villalobos, 2021). Sin embargo, estos “logros” son miopes frente a los impactos socio naturales que genera la implementación de este modelo, tales como: el incremento del monocultivo y la consecuente pérdida de agrobiodiversidad; el uso irracional e intensivo de agrotóxicos y sus efectos negativos en la salud; el acaparamiento y contaminación del agua y los suelos, la creciente precarización del trabajo agrícola que tiene en el trabajo temporal su expresión contemporánea de las nuevas esclavitudes propias del mundo moderno-colonial y la pobreza multidimensional que sigue siendo más alta en el campo (28%) que en la ciudad

2 Uno de los creadores e impulsores de esta idea fue Mario Montanari, empresario pionero de la industria del salmón en Chile (Leporati; Villalobos, 2021).

(15,5%), según la última encuesta CASEN³ del año 2022. Es decir, existen bastantes argumentos para pensar que la política pública no ha llegado a la población que más lo necesita y que su orientación contribuye a la agudización de la crisis medioambiental y, por tanto, a la generación de sistemas agroalimentarios frágiles y deslocalizados.

Esta declaratoria política institucional se traviste de progresista en la actual administración del gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) al declarar como una de las tres áreas estratégicas para el sector silvoagropecuario, el desarrollo rural y el Buen Vivir como prioridades en el accionar del Ministerio de Agricultura (Minagri, 2025). Habrá que esperar para evaluar los resultados de esta declaratoria como también los rumbos que tomará la siguiente administración, aun cuando no se observa en el horizonte grandes transformaciones con ninguna de las dos opciones electorales que parecen tener liderazgo en las intenciones de voto de los y las chilenas al momento de escribir este texto.⁴

4 Salidas y caminos constructores de esperanza

La agroecología le ha propuesto al mundo productivo campesino una serie de estrategias alternativas de producción alimentaria, dentro de las cuales muchas de ellas (aunque no todas) apelan a la memoria y al patrimonio inmaterial de los territorios, por lo tanto, siempre han estado ahí, siendo ahora la agroecología el espacio de enunciación y rescate de ese conocimiento y prácticas. Por lo

3 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional.

4 En el caso del candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, su programa de gobierno solamente hace alusión al tema con la vieja fórmula de “Impulsar a Chile como potencia agroalimentaria” (Kast Presidente, 2026); mientras que en el caso de la candidata de la coalición de izquierda, Jannette Jara, viró de una propuesta donde relevaba temas como el cooperativismo, un nuevo pacto con la naturaleza y una ruralidad integrada al desarrollo con atención a las propuestas de la agroecología; hacia un programa mucho más conservador que vuelve a poner en el centro del desarrollo agropecuario con foco en la exportación, la incorporación de tecnologías que optimicen el uso del agua, energía e insumos, elevando la eficiencia productiva y reduciendo la huella ambiental (<https://jeannettejara.cl>). Es decir, medidas muy alejadas de la recuperación de la soberanía de los sistemas alimentarios locales.

que no solo se trata de una salida técnica, sino que representa un proyecto político de transformación de las relaciones desiguales y desequilibradas que promueve el capitalismo a escala mundial y local. Es decir, se trata de fórmulas integrales, situadas y transformadoras del contexto rural como también de su relación con la ciudad y el consumo, ya que, como hemos anticipado la cuestión alimentaria es una dimensión transversal de la vida de las personas que las afecta directamente como también en los modos que nos hemos dado de relación con la naturaleza y entre nosotras mismas. Por lo tanto, proponemos leer la agroecología y sus expresiones locales, como estrategias emancipadoras que apuestan por sostener prácticas que favorezcan la reproducción de la vida, con base en el trabajo colectivo y recíproco y con capacidad para leer y posicionarse críticamente frente a los “peligros” de la cooptación o despolotización de la misma (Val y Rosset, 2022). Se trata de una agroecología que despliega su capacidad creativa para dar respuesta a los desafíos a que nos enfrentamos en el actual escenario de policrisis, ya sea tanto en el campo técnico como en el área del saber y, al mismo tiempo, con capacidad para integrar, contener y resignificar las experiencias desde el prisma del diálogo de vivires (Masi, 2025).

En sus recorridos, las prácticas agroecológicas han sistematizado algunos aprendizajes y temáticas sensibles de trabajar con perspectiva de futuro. Una de ellas se relaciona directamente con la idea de proximidad, es decir, generar un contexto y una articulación económica, política y cultural que permita vincular estrechamente y sin grandes intermediarios la relación entre la producción y el consumo. Se trata de la materialización del slogan “Del campo a la mesa”, pero que tiene la dificultad de aplicación asociada a la falta de políticas públicas e incentivos que promuevan circuitos cortos de comercialización que puedan competir con las grandes cadenas de distribución alimentarias y que re-ubiquen el foco en la producción local y estacionaria, ya que dichas estrategias no solo hacen posible la circulación de mercancías sino que también operan como espacios reivindicativos y educativos que le dan otro sentido a la alimentación y la producción agrícola. Por ello, es trascendental atender el impulso de hábitos y prácticas de consumo

más responsables que tienen en cuenta y valoran la producción local, la recuperación por el “buen gusto” de los alimentos, la alimentación estacionaria y limpia, la negación del espacio del supermercado como referente prioritario del consumo alimentario, entre otras. Es decir, promueven un proceso de recuperación crítica del consumo que nos interpele cotidianamente e impulse a reflexionar sobre lo que comemos, dónde se producen los alimentos y cómo se distribuyen.

En este marco se vuelve relevante la dimensión de la confianza sobre todo en lo que respecta a la construcción del vínculo entre los productores y el consumidor final. Un vínculo basado en la confianza parece más fuerte y sustentable que otras formas de relación comercial que solamente resuelven la ecuación compra-venta, ya que permite reproducir relaciones de familiaridad que potencian un compromiso entre el productor y el consumidor (Nardacchione; Blasi, 2025) y dan legitimidad al acto educativo de una compra consiente que busca formar y modificar la relación exclusivamente comercial que tiene el consumo alimentario en un contexto del modelo convencional agrario.

La confianza adquiere una serie de formas que permiten modelar relaciones, incrementar los apoyos, reducir incertidumbres, asegurar el compromiso y hacer operativo una serie de intercambios (generalmente, aunque no exclusivamente, de tipo no monetario) que sin su existencia sería imposible de llevarlos a cabo. La confianza opera como certificadora de las prácticas productivas, es decir, es la garantía que tienen los consumidores de que los alimentos que están en sus mesas son el resultado de prácticas productivas limpias, respetuosas de la naturaleza y consientes de las necesidades de los consumidores. Opera como opuesto político a la lógica de la certificación externa que es gestionada por un agente externo (empresa certificadora), que tiene un alto costo y que está orientada fundamentalmente para la comercialización de exportación. Por lo tanto, la confianza funciona como un mecanismo alter institucional, ya que, sus modalidades como dinámicas no son reconocidas por las grandes definiciones de las políticas públicas agrarias ni tampoco por el mercado, aun cuando tienen un peso relevante en sistemas de certificación internos/orgánicos

(como es el caso de Chile) o de los llamados “sistemas participativos de garantías” (Etcheverriborde et al, 2022; Machuca; Ávila, 2022).

Otra de las dimensiones claves en la progresión de estas experiencias es la capacidad de articulación y trabajo en red, tanto por parte de los productores como de los consumidores. Experiencias como las células de consumo en el sur de Brasil (Rover; Saravia, 2019) han verificado que la gestión, sobre todo logística, de un circuito corto de comercialización es mucho más fácil si se cuenta con una red de productores previamente organizados entre sí. Además de facilitar la comunicación entre productores y consumidores, la articulación permite avanzar en procesos productivos relevantes, como, por ejemplo: la formación, la transmisión de experiencias y saberes, la planificación de cultivos en conjunto o la defensa de territorios bajo amenazas comunes.

Sin embargo, dentro de las experiencias de producción y comercialización agroecológica chilena existe cierta debilidad en las redes que conectan las experiencias entre sí, en ocasiones no se cuenta con información basal que permita saber quiénes y donde están determinadas experiencias y/o actores claves del territorio con los cuales se puede construir un camino en conjunto. Esto hace más urgente potenciar la articulación que permite darle sustentabilidad en el tiempo a los colectivos existentes, a la vez que facilitaría la multiplicación de este tipo de experiencias en el corto plazo. Por lo tanto, el trabajo en red tiene directa relación con la necesidad de vincular estos procesos a movimientos sociales afines. Politizar la práctica es una forma de garantizar su permanencia en el tiempo, como también de construir relaciones de apoyo y reciprocidad con otros. Por ello, la vinculación con movimientos sociales permite extender los márgenes de manio- bras, como también plantearse un futuro donde quienes compar- tan una misma proyección política puedan acompañarse.

Estas experiencias comparten, además de una crítica implí- cita, en unos casos, y explícita, en otros, al modelo de desarrollo extractivista, una lógica política novedosa que se enfrenta a la larga crisis de representación política partidaria. Esta nueva forma de acumulación política tiene que ver con principios como la

autogestión, la consolidación de redes de apoyo, lo colaborativo y el trabajo territorial de base popular. Por ello, estas expresiones buscan recuperar el sentido colectivo de las transformaciones que propone la agroecología, sobre la base de que existen problemas comunes a todas las unidades productivas que pretenden impulsarla. Esta perspectiva, en el contexto de la historia reciente de Chile (1973 a la actualidad), fue desterrada de la narrativa política y social siendo reemplazado por un discurso que sublima los principios de competencia, individualismo y productividad. Bajo esta mirada, los procesos relacionados con la reproducción de la vida (Federici, 2010) y las valoraciones a la comunidad y lo común fueron catalogados como formas arcaicas, atrasadas, exóticas, que finalmente entorpecían el desarrollo y el progreso. A pesar de la fuerza (gestionada sin contrapeso político por la dictadura cívico militar) y legitimidad que adquirió dicha narrativa (gracias al continuismo de los gobiernos post-dictadura), han logrado sobrevivir experiencias asentadas en el espacio local e inmediato que reivindican la gestión común de recursos, saberes y prácticas como una virtud y una oportunidad de interpretar el entorno desde un nuevo sitio.

La construcción de estos espacios plantea retos que tienen que ver con la gestión de las expectativas de participación en proyectos de esta naturaleza. Se corre el riesgo de convertirlas en los momentos de satisfacción de ciertas necesidades individuales al amparo de un proyecto colectivo, sobre todo cuando dichas experiencias se encuentran en un estado germinal y no poseen marcos de acción frente a determinados procesos y tomas de decisiones. Se entiende o se espera que la colaboración de cuenta de caminos o alternativas de apoyo a las personas que participan de un colectivo más allá de las necesidades del propio colectivo. En este sentido, se construye una visión sobre la colaboración que se basa en el apoyo del "otro" por su condición de precariedad laboral y/o económica. El trabajo colaborativo pierde el sentido colectivo para convertirse en una estrategia de solución de nuestras expectativas o necesidades básicas. Es decir, hay un uso instrumental de lo colectivo, como principio, y también de los espacios. Por lo tanto, el trabajo colaborativo requiere de priorizar los principios

de reciprocidad donde la prioridad tiene que ver con la consolidación de un proyecto común que puede potencialmente contener o co-construir salidas y alternativas de solución a los problemas individuales de las personas que habitan esos espacios.

A este grupo de desafíos y dimensiones relevantes para el desarrollo de una agroecología transformadora, hay condiciones propias del mundo campesino que dan marco y contexto a estas experiencias. A este respecto la agricultura familiar campesina, parece ser el paraguas que cubre esta diversidad de opciones y caminos. Además, permite visibilizar el papel que juega la agricultura familiar en la resolución de la cuestión alimentaria. En términos globales, la agricultura familiar en América Latina y el Caribe, contabiliza 17 millones de unidades productivas que agrupan alrededor de 60 millones de personas (Flores; Jara, 2014). En relación al empleo sectorial, la agricultura familiar tiene relevantes indicadores en Sudamérica aunque con diferencias importantes entre los países. Por ejemplo, en Argentina concentra un 53% del empleo sectorial, mientras que en Brasil la cifra escala al 77% (Flores; Jara, 2014). En Chile, la agricultura familiar representa el 92% de las explotaciones agrícolas las cuales contribuyen al 61% del empleo del sector agropecuario (Salcedo; Guzmán, 2014; Ibarra, 2020). Es decir, se trata de un actor relevante dentro de la economía agraria que reclama un lugar y posición más ajustada al peso específico de su actividad.

La pequeña agricultura chilena ha estado fuertemente presionada por la instalación del modelo agroexportador que, como vimos, concentra hace años los grandes incentivos de la política pública. En el último tiempo se han diseñado algunos instrumentos para su fortalecimiento, sobre todo de la mano de INDAP que ha experimentado incrementos relevantes en su presupuesto anual desde el 2008 en adelante (Berdegué; Rojas, 2014), sin embargo, el horizonte sigue siendo el mismo: fomento productivo con foco en la competitividad en los mercados nacionales e internacionales (Pizarro; Niederle, 2020). Un horizonte lejano y que no se ajusta mucho a la realidad, ya que el 86% de los productores y productoras de la agricultura familiar campesina sigue vendiendo sus productos a través de circuitos cortos de venta directa al

consumidor sin la presencia de intermediarios (INDAP, 2015). Frente a este escenario parece razonable preguntarse por la sensatez de una política que se orienta a la productividad y con foco en los grandes mercados, cuando la agricultura familiar campesina no tiene resuelta las condiciones mínimas para sostener sus unidades productivas (acceso a agua y tierra y la protección a la propiedad común de las semillas) y sigue apostando por formatos de comercialización locales y próximos. Además, se debe tener en cuenta que la agricultura familiar es heterogénea en su conformación interna y en diferentes dimensiones, tales como: acceso a la tecnología y a los mercados; políticas de apoyo estatal; grados de diversificación productiva; acceso a las riquezas naturales, entre otros. Podemos incluir dentro de esta categoría desde pequeñas unidades económicas destinadas al autoconsumo o economías de subsistencia, hasta experiencias más de tipo empresarial (algunas con buenos niveles de rentabilidad y acceso a los mercados), pasando por modelos de transición y/o experiencias de vinculación al mercado frágiles (Urquía, 2014).

La agricultura familiar y local representa una oportunidad para modificar las lógicas mercantiles de consumo en la ciudad. Propiciar un diálogo entre la agricultura familiar y los consumidores críticos de alimentos alojados en la ciudad, es un paso necesario para comenzar a incrementar mayores y mejores niveles de concientización respecto de los retos que tiene uno y otro actor. Problemas como la pobreza rural, el despoblamiento generacional del campo (ausencia de jóvenes), la falta de acceso a las riquezas naturales necesarias para la producción; son de los principales problemas que hoy día enfrenta la agricultura familiar. Por otra parte, la carencia de alimentos de calidad, el sobreprecio, el acceso y la presión de las lógicas de consumo convencionales; son de los principales retos que los consumidores hoy día tienen que enfrentar. Considerando esto, construir metodologías que acerquen ambas realidades y que potencien espacios de conocimiento mutuo, se convierte en una necesidad y en un horizonte político a conquistar.

5 Conclusiones

Todas estas experiencias e iniciativas dan cuenta de la importancia que está adquiriendo el tema de la alimentación tanto en el contexto urbano, donde se concentran la mayor parte de los consumidores, como en el rural, donde están asentados las personas y colectivos dedicados a la producción. Esta tendencia genera condiciones favorables para revalorar la producción alimentaria de pequeña escala, para fortalecer los hasta ahora escasos circuitos cortos de comercialización y para la construcción de un contexto social y cultural que permita dar oportunidad a políticas públicas centradas en las personas y en la modificación de las condiciones estructurales desfavorables para los sistemas alimentarios locales.

Estas experiencias pueden ser interpretadas como alternativas al modelo del agronegocio, que buscan democratizar el acceso a alimentos de calidad, recuperar el control sobre los sistemas productivos y de comercialización de alimentos, potenciar la agricultura familiar de pequeña escala y transformar las prácticas de consumo hacia unas estacionales, locales y diversas. Se trata de procesos y alternativas que emergen desde los territorios, como expresiones necesarias de un cambio hacia un modelo alimentario basado en otros principios y fundamentos. Tanto la reproducción de estas experiencias, como su escala, depende en gran medida de las capacidades productivas de los territorios (plasmadas en la profundización de la articulación entre los productores, la recuperación de prácticas y saberes que reproducen una relación más equilibrada con el entorno, entre otras dimensiones); de la ampliación de los marcos democráticos sobre los cuales se asienta la toma de decisiones y de los procesos de cambio de la política pública agraria, superando cierta relación sumisa, de instrumentalización o adecuación que estas experiencias, en ocasiones, adquieren en su relación con el Estado.

Las alternativas agroecológicas no solo persiguen la construcción de nuevos marcos de acción económicos y políticos, sino que también son la oportunidad de hacer visibles movimientos sociales y otras expresiones de lucha que construyen horizontes políticos transformadores. La reapropiación de la naturaleza (tierra, agua y otros bienes naturales), la construcción de mayores niveles de

soberanía alimentaria, las resistencias al avance del agronegocio, la recuperación de saberes y prácticas inferiorizadas, son algunos de esos destellos de los horizontes que guían ética y políticamente las acciones de estas experiencias.

REFERÊNCIAS

ARELLANO, A. **El millonario negocio del agua I**. La historia del discreto empresario que se transformó en el zar de las aguas en Chile. CIPER-Chile, 2013. Disponible en: <<https://www.ciperchile.cl/2013/12/10/la-historia-del-discreto-empresario-que-se-transformo-en-el-zar-de-las-aguas-en-chile/>>. Accedido en: 18 dic. 2025.

BENGOA, J. **Reforma Agraria y revuelta campesina**. Seguido de un homenaje a los campesinos desaparecidos. Santiago: Biblioteca de la Memoria LOM, 2016.

BERDEGUÉ, J.; ROJAS, F. (2014). **La agricultura familiar en Chile**. Santiago: Serie Documentos de Trabajo n. 152, RIMISP, 2014.

CHONCHOL, J. **Por una nueva reforma agraria para Chile**. Santiago: Biblioteca de la Memoria LOM, 2018.

CORREA, M. **Historia del despojo**. El origen de la propiedad particular en el territorio mapuche. Santiago: Pehuén Editores; Ceibo Editores, 2021.

DEL VALLE CALZADA, E. El fenómeno del acaparamiento global de tierras: análisis desde la óptica de su impacto en los derechos humanos. **Novum Jus**, v. 16, n. 2, p. 133–154, 2022. Disponible en: <<https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.2.6>>. Accedido en: 10 nov. 2025.

DUCH, G. **No vamos a tragar**. Soberanía alimentaria: una alternativa frente a la agroindustria. Barcelona: Los Libros del Lince, 2014.

ELIGE VIVIR SANO. **Programa Elige Vivir Sano 2011–2013**. Presidencia de la República, Gobierno de Chile, 2011. Disponible en: <<https://www.sebastianpinera.cl/wp-content/uploads/2019/06/elige-vivir-sano.pdf>>. Accedido en: 8 nov. 2025.

ETCHEVERRIBORDE, A. et al. Agroecología en el Sudeste Bonaerense: controversias del Sistema Participativo de Garantía (SPG). **Revista RIVAR**, n. 27, p. 1-21, 2022.

FANON, F. **Los condenados de la tierra**. San Isidro: Editorial Txalaparta, 2017.

FAO. **Versión resumida de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025**: Hacer frente a la inflación alta de los precios de los alimentos en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. Roma, 2025. Disponible en: <<https://doi.org/10.4060/CD6015es>>. Accedido en: 14 dic. 2025.

FAÚNDEZ, Rodrigo; MUNDACA, Rodrigo; et al. **Recuperar el agua**. Santiago: Editorial Aun Creemos en los Sueños, 2017.

FEDERICI, S. **Calibán y la bruja**: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires: Tinta Limón, 2010.

FLORES, A.; JARA, B. En el Año Internacional de la Agricultura Familiar: panorama de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. **Revista Enlace**, n. 21, p. 13-15, 2014.

FORBES. **World's Billionaires List 2025**. Forbes Magazine, 2025. Disponible en: <<https://www.forbes.com/billionaires/>>. Acceso em: 10 dic. 2025.

GARCÍA, J. A.; SANTIAGO, M. Importaciones de maíz en México: un análisis espacial y temporal. **Investigación Económica**, v. 63, n. 250, p. 131-160, oct./dic. 2004. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672004000400131>. Accedido en: 14 dic. 2025.

GÓMEZ, S. La reforma agraria en Chile: una mirada evaluativa. **Revista Latinoamericana de Estudios Rurales**, n. 8, p. 1-40, 2023.

IBARRA, T. **Manifiesto por la agricultura familiar**: primera línea de la alimentación. CIPER Chile, 2020. Disponible en: <<https://www.ciperchile.cl/2020/07/11/manifiesto-por-la-agricultura-familiar-primer-a-linea-de-la-alimentacion/>>. Accedido en: 12 dic. 2025.

INDAP. **Agricultura Familiar Campesina y Circuitos Cortos en Chile**: Catastro preliminar. Santiago: Serie Estudios y Documentos de Trabajo, n. 2, INDAP, 2015. Disponible en: <<https://bibliotecadigital.ciren.cl/server/api/core/bitstreams/1aa69c2c-9678-4ddf-925a-70522e7a5223/content>>. Accedido en: 25 oct. 2025.

KAST PRESIDENTE. **Planes Chile**. Santiago, Chile, 2026. Disponible em: <<https://kast.cl/#planes-chile>>. Accedido en: 12 ene. 2026.

LEPORATI, M.; VILLALOBOS, P. Políticas públicas y sistema alimentario en Chile. In: LE COQ et al (orgs.). **Políticas Públicas y Sistemas Alimentarios en América Latina**. Río de Janeiro: E-papers, p. 241-276, 2021.

MACHUCA, J.; ÁVILA, F. Sistemas de garantía participativos como estrategias de desarrollo para productores rurales. **Revista Tendencias**, n. 2, p. 246-272, 2022.

MASI, A. M. **Pensar el Sur desde el Diálogo de vivires**. Montevideo: Programa APEX, Universidad de la República, 2025.

MINAGRI. **Lineamientos estratégicos**, 2025. Disponible en: <<https://minagri.gob.cl/lineamientos-estrategicos/>>. Accedido en: 18 dic. 2025.

MINSAL. **Encuesta Nacional de Salud 2016-2017**. 2018. Disponible en: <<https://epi.minsal.cl/encuesta-nacional-de-salud-2015-2016/>>. Accedido en: 18 de octubre. 2025.

MORENO-SÁENZ, L. et al. Dependencia de México a las importaciones de maíz en la era del TLCAN. **Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas**, n. 1, p. 115-126, 2016.

MUNDACA, R. **La privatización de las aguas en Chile**. Causas y resistencias. Santiago: América en Movimiento, 2014.

NARDACCHIONE, G.; BLASI, B. La construcción de confianza en mercados feriales de alimentación saludable del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. **Revista Latinoamericana de Estudios Rurales**, n. 10, p. 1-34, 2025.

OMS. **World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals**. Geneva: OMS, 2023.

ONU. **El hambre extrema alcanza un máximo histórico**. 2025. Disponible en: <<https://news.un.org/es/story/2025/05/1538811>>. Accedido en: 14 dic. 2025.

OMS. **Obesidad y sobrepeso**. 2025. Disponible en: <<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>>. Accedido en: 16 de diciembre. 2025.

PIZARRO, E.; NIEDERLE, P. Movimientos sociales, políticas públicas y construcción de mercados para las agriculturas familiares campesinas en Chile. **Revista Latinoamericana de Estudios Rurales**, n. 5, p. 1-32, 2020.

PORTILLA, B. **La política agrícola en Chile: lecciones de tres décadas**. Santiago: Serie Desarrollo Productivo, n. 68, CEPAL, 2000.

POZO, J. del. **Historia de América Latina y del Caribe (1825-2001)**. Santiago: LOM, 2002.

ROBLES, E. Acaparamiento de tierras: el futuro se escapa como polvo en las manos. **Revista Biodiversidad**, n. 118, p. 29-32, 2023.

ROVER, O.; SARAVIA, P. Mercado e comercialização de produtos da agricultura familiar. In: **Desenvolvimento Sustentável na Agricultura**. Montevideo: Comité Académico Agroalimentario, AUGM, 2019, p. 307-318.

SCHWAB DO NASCIMENTO, F. **Sistema agroalimentario de base ecológica: el caso brasileño**. 2019. Tese (Doutorado) — Universidad de Córdoba, Córdoba, 2019.

SALCEDO, S.; GUZMÁN, L. (eds.). **Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: recomendaciones de política**. Santiago: FAO, 2014.

SARAVIA, P. Impactos del neoliberalismo en Chile: lecturas sobre un país que busca recuperar su dignidad. In: NEVES DA SILVA, E. (org.). **América Latina em perspectiva: análise da escalada do autoritarismo e neoliberalismo sobre o agrário no século XXI**. Passo Fundo: Acervus Editora, 2021.

SARAVIA, P.; PINHEIRO, L. An agenda of failures: a critical look at the 2030 Agenda from the perspective of social movements. In: MANZANERA-RUIZ, R.; TUDELA-VÁZQUEZ, M.; ÁLVAREZ-LUCENA, N. **Universities and the Sustainable Development Goals**. London: Edward Elgar Publishing, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.4337/9781035342839.00007>>. Accedido em: 14 dic. 2025.

SIAP – SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. **Datos abiertos**. México: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018. Disponível em: <<https://www.agricultura.gob.mx/datos-abiertos/siap>>. Accedido em: 20 de diciembre. 2024.

SUBREI – SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES. **Acuerdos económicos-comerciales (AEC) vigentes**. Chile, 2025. Disponível em: <<https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes>>. Accedido em: 19 dic. 2025.

URQUÍA, N. Impulsar la agricultura familiar para alcanzar la seguridad alimentaria local y mundial. **Revista Enlace**, n. 21, p. 9-12, 2014.